



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO "EVALUACION Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL CON CARGO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD"

Expediente 023/2022

ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Tras el oportuno concurso, por procedimiento abierto, se adjudicó el contrato de servicios, denominado "EVALUACION Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL CON CARGO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD", el día 27 de mayo de 2022, a la entidad FIDEM, ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LA FAMILIA, por un precio de adjudicación de 299.280,00 euros, IVA exento y para un período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.

El contrato contempla la posibilidad de prórroga del mismo, de acuerdo con el apartado 18 del PCAP hasta un máximo de 2 años, dos años, un año o varios períodos inferiores al año, conforme a las necesidades apreciadas por el órgano de contratación, sin que el plazo total pueda exceder, incluida la prórroga, de 4 años. Además, el contrato puede modificarse de acuerdo con las previsiones del apartado 22 de la cláusula I del PCAP.

La atención prestada a los jóvenes por la citada Entidad mantiene un elevado nivel de calidad, desarrollando diversos programas de intervención que repercuten muy positivamente en la evolución y adaptación personal de los jóvenes beneficiarios del servicio. Esta intervención se desarrolla en las siguientes áreas:

- Evaluación.
- Tratamiento terapéutico a menores, con medida de protección, en situación de acogimiento residencial.
- Asesoramiento a los equipos técnicos de los centros en los que se encuentren los menores objeto de tratamiento.
- Atención inmediata a menores embarazadas, con medida de protección y en situación de acogimiento residencial.

NECESIDADES DETECTADAS

El perfil de los menores atendidos con este contrato es el siguiente:

- a) Edad: de 6 a 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años). Excepcionalmente se derivarán menores de edades de 6 años, y siempre que sus características se ajusten a las definidas en el presente contrato.
- b) Sexo: ambos sexos.
- c) Con medida de protección adoptada por la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, y que se encuentren en situación de acogimiento residencial.
- d) Menores que precisen programas terapéuticos específicos de alta intensidad para controlar su conducta y sus emociones. Esta intervención no debe de sustituir, ni duplicar, a la intervención que en este ámbito es competencia de los centros de salud mental dependientes de la red pública de la Comunidad de Madrid.
- e) Adolescentes embarazadas, en acogimiento residencial, que precisen asesoramiento y orientación psicológica.

Los menores que residen en centros de Protección han pasado, en su mayoría, por múltiples carencias afectivas, psicológicas y de cuidados materiales. por lo que precisan normalmente evaluación y tratamiento psicológico y la administración deberá garantizar todos los esfuerzos para dar respuesta a sus necesidades, y responder a ellas con criterios de calidad.

El trabajo en el ámbito de la infancia protegida es de una extraordinaria complejidad, pues atañe a la vida cotidiana, al trabajo destinado a la normalización e integración de los menores, y a la resolución de situaciones de crisis.

Las dificultades para expresar sus propios sentimientos y estados emocionales son algunas características de los futuros destinatarios de este contrato. El apoyo temprano puede marcar una diferencia significativa en la vida de un niño. El trabajo con estos menores requiere de una secuenciación en el tiempo para dar respuesta a sus necesidades y características, desarrollando un plan terapéutico individual elaborado para cada menor.

Actualmente, esta Dirección General tiene suscrito el presente contrato a fin de dar apoyo a tales necesidades. En este sentido, debe remarcarse que en el último año **se ha incrementado la demanda de atención a menores que precisan recibir tratamiento psicológico, y este incremento se mantiene como una tendencia en el tiempo.**

En este sentido, las actas semestrales de seguimiento del contrato elaboradas por la DGIFFN (se incluyen datos hasta del primer semestre de 2024, último dato disponible actualmente) ponen de relieve las siguientes magnitudes relativas al número de menores atendidos, y lista de espera para el servicio:

	Menores atendidos	Lista de espera	% Lista Espera
2º sem 2022	84	26	30,95%
1º sem 2023	99	19	19,19%
2º sem 2023	105	22	20,95%
1º sem 2024	110	15	13,64%
PORCENTAJE MEDIO LISTA ESPERA			21,18%

A lo largo del desarrollo del contrato se ha ido generando un porcentaje promedio de lista de espera de más del 20 %, lo que justificaría la modificación que ahora se propone.

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN

El contrato objeto de modificación se adjudicó estando ya vigente plenamente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en adelante, LCSP), por lo que han de regir las previsiones de la citada disposición normativa sobre las modificaciones del contrato, en particular sus artículos 203 y 204.

Por su parte, en el apartado 22 la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del vigente contrato, se recoge que podrá acordarse la modificación del contrato consistente en el aumento/disminución de las sesiones previstas.

*“Cuando se constate, con datos numéricos en posesión directa de la DGIFN, un aumento/ disminución en la demanda, podrá modificarse el contrato, aumentando/disminuyendo **hasta un 20 % de las sesiones finalmente contratadas**. Dicho aumento/disminución hasta el 20% será directamente proporcional al número de casos pendientes de derivar que integren la lista de espera elaborada por el Área de Coordinación de Centros y al número equipos residenciales que haya valorado el Área de Coordinación de Centros que precisen de las intervenciones de apoyo y asesoramiento recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El*

porcentaje de la modificación se fundamentará siempre en los datos numéricos obtenidos a partir de los pertinentes estudios y análisis de necesidades efectuado por el Área de Coordinación de Centros.”

Hay que tener presente que, en última instancia, entiende el Tribunal Europeo (**Sentencia Succhi di Frutta**) que una modificación contractual posterior a la adjudicación es contraria al Derecho Comunitario, a menos que se cumpla **alguna de las dos siguientes condiciones**:

a) Que la modificación no afecte a ninguna condición esencial de la licitación, entendiendo que una modificación es esencial cuando no quepa excluir que las condiciones originales, menos favorables, hayan disuadido a otros licitadores a participar en la licitación, o que a la vista de las condiciones actuales podría haber otros licitadores interesados en la licitación, o que la adjudicación hubiera recaído en otro licitador distinto.

b) Que la posibilidad de efectuar una modificación, así como sus modalidades, **esté prevista de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la licitación.**

Desde un punto de vista cuantitativo, la modificación supone un 9,99% del precio del contrato y de las sesiones totales del contrato, que se cifra en 586 sesiones.

El importe de adjudicación (299.280 €) coincide con el importe de licitación porque de acuerdo con la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), La cantidad presupuestada no disminuiría, por lo que la aplicación de la baja de adjudicación sobre el precio unitario repercutiría en un aumento del número de sesiones. De acuerdo con esto, la entidad adjudicataria realizó una oferta de 51 euros/sesión, lo que incrementó las 5.160 sesiones totales (2.580 anuales) previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas en 5.868 totales (2.934 anuales).

La modificación consiste cuantitativamente en la ampliación de 586 sesiones, incrementándose proporcionalmente el precio, pero no alterando de forma sustancial las prestaciones inicialmente pactadas, por lo que **no ha de considerarse una modificación sustancial**, por cuanto cabe presumir razonablemente que, con las nuevas condiciones, los licitadores o las ofertas presentadas habrían sido los mismos, ya que cuando se licitó inicialmente el contrato, el número de sesiones inicialmente programadas era de 5.160 (2.580 anuales).

Desde el punto de vista cualitativo, para prestar las 586 sesiones adicionales, se establece que la plantilla adscrita al contrato experimentará un crecimiento relacionado con las citadas sesiones adicionales; dicho incremento será proporcional en todas las categorías profesionales conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para las 2.934 sesiones iniciales. No obstante, se considera desde este centro directivo que hace el seguimiento del contrato, que no es necesario ampliar la plantilla de personal, teniendo capacidad suficiente la entidad para prestar las sesiones adicionales, lo que supone mayor asunción de casos por cada profesional a fin de reducir de manera sustancial la lista de espera.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

En esta línea, el Consejo de Estado ha resaltado **la importancia de justificar el interés público**, afirmando que *“la modificación contractual debe hallarse respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubitado”,* de modo que *“al concurrir una “razón de interés público” para dicha modificación, habida cuenta de que si se procediese a la resolución del contrato y a una nueva licitación, no se obtendría ninguna ventaja desde el punto de vista técnico....y se incurriría en un gasto superior al que deriva de la modificación del contrato, a consecuencia del aumento de los costes derivado del aplazamiento en el tiempo de la nueva licitación”*

Con arreglo al artículo 203 LCSP *“los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207”.*

Expuestos los motivos anteriores se solicita aumentar en 586 las sesiones de este contrato, pasando de las 2.934 actuales a 3.520.

Con esta ampliación, se incrementará la capacidad de atención, manteniéndose la misma plantilla y el mismo precio unitario.

Teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida, que el coste de otros recursos privados es mucho mayor y que la entrada en vigor en el año 2024 de la Resolución de 11 de abril de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de creación de complemento retributivo específico para el ámbito de la Comunidad de Madrid del IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores., con una subida progresiva anual hasta el año 2028, ha supuesto una subida del coste del factor trabajo, la modificación del contrato supone un ahorro en proporción al incremento que supondría su aplicación en los costes laborales del presupuesto de licitación si se convocase un nuevo contrato.

El interés público se sustancia, por tanto, en la **supremacía del interés del menor**, cuya salud y bienestar deben ser garantizados, y que, por sus especiales circunstancias, no pueden ser atendidos a través de otros recursos, por requerir una intervención especializada.

CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA

De acuerdo con el apartado 22 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del vigente contrato, se ha dado previa audiencia al adjudicatario, mediante comunicación telemática y ésta ha manifestado su conformidad con la modificación propuesta mediante escrito de fecha 22 de enero de 2025.

Formalmente, la modificación contractual supondrá cambiar la redacción de ambos pliegos, sustituyendo todas las referencias que se hagan al número de sesiones, que ahora sería de 3.520.

Por todo ello, se propone la modificación propuesta para iniciarse a partir del día 1 de abril de 2025 y para el período de la última prórroga, en las condiciones económicas y técnicas establecidas en el documento de audiencia, lo que supone un gasto de **VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (29.886,00 €)** estando el servicio exento de IVA.

Anualidad	Precio sesión	Sesiones/año	TOTAL
2025	51,00 €	586	29.886,00 €

Dicho importe se imputará a la Partida 22709 del Programa 232F de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Con base en el informe emitido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid de 30 de octubre de 2019, en la que se establecen los criterios de actuación de los expedientes de gasto que incluyan en su ejecución material el mes de diciembre de un ejercicio y que dispongan de un procedimiento de verificación del servicio, se tramitará como plurianual, imputando el importe correspondiente al mes de diciembre con cargo a los créditos del ejercicio siguiente.

Por lo anteriormente expuesto se procede a tramitar el gasto con el siguiente desglose:

Anualidades	Precio Sesión	Sesiones/mes	Nº meses imputados	Nº meses ejecución	Importe Total (IVA exento)
2025*	51,00 €	65	8	9	26.520,00 €
2026**	51,00 €	66	1	0	3.366,00 €
TOTAL					29.886,00 €

(*) Del 1 de abril al 30 de noviembre de 2025

(**) Del 1 al 31 de diciembre de 2025

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAÍTA - ***6248**
Fecha: 2025.01.23 15:38

Fdo.: Silvia Valmaña Ochaíta